

LOS ELEFANTES MUEREN DE INDIGESTIÓN¹

El caso de Venezuela

Alfredo Keller R.

Según las últimas encuestas que hemos realizado, esos monstruos de la política venezolana que fueron Acción Democrática y Copei cuentan con el respaldo hoy de tan sólo el 7% y el 2% de la población, respectivamente, cifras demole-doramente escuálidas cuando se recuerda que en las elecciones de 1988 obtuvie-ron entre los dos el 93% del voto presidencial del país y hasta hace tan sólo tres años culminaban cuatro décadas de control total de las estructuras de poder en Venezuela.

¿Cómo pudieron derrumbarse de esta manera los paladines de la demo- cracia venezolana, los constructores de la moderna infraestructura nacional, los creadores de la industria más grande de América Latina, como lo es PDVSA, los adalides de la democratización del Continente y, según el parecer de muchos, los administradores por largos años de uno de los países más ricos del Hemisferio?

Esta es la historia de cómo la abundancia intoxica y de cómo puede morir- se por indigestión.

¹ Conferencia presentada ante el seminario internacional organizado por FUNDEMOS: *Sistema de Partidos en la Región Andina: Lecciones de la Historia*, La Paz, 28 de agosto de 2001.

El parto de las ideas

Esos grandes partidos venezolanos rondan actualmente los 60 años de edad. Se fundaron al fragor de las luchas por una sociedad democrática, igualitaria y de justicia social dentro de una tradición histórica de gobiernos autoritarios y de líderes personalistas que concebían al país como su hacienda particular y al resto de los ciudadanos como siervos de la gleba. La política era un asunto de imposición por la fuerza y retarla significaba usualmente el grillete o el exilio. Además del Caudillo – Presidente, la única institución con legitimidad y prestigio eran las Fuerzas Armadas por lo que el valor dominante consistía en la administración del orden social. A nadie se le ocurría que debía haber un espacio para eso que hoy en día llamamos la “sociedad civil” y la palabra “democracia” no había aparecido aún en el vocabulario nacional.

Pero la idea finalmente surgió en 1928 en las mentes de un grupo de estudiantes universitarios que para darle forma crearon un partido político. Acción Democrática, que en sus inicios se inspiraba en una filosofía de lucha de clases, abogaba por el derecho al sufragio universal y secreto, por un sistema de democracia parlamentaria, por el acceso igualitario a la redistribución de la renta nacional y por la corporativización de la sociedad. En pocos años, Acción Democrática decantó su marco de referencia doctrinaria, desechó el ropaje marxista con el cual había nacido y fue perfilándose progresivamente como un partido de expresión socialdemócrata de fuerte raigambre popular.

Copei surgió en parte como una reacción a los excesos programáticos de Acción Democrática. A diferencia de este partido, de perfil liberal, estudiantil, obrero y campesino que intentaba tomar el poder por asalto, Copei aglutinó en poco tiempo a las élites profesionales del país, a la burguesía acomodada y educada y a la intelectualidad conservadora. Piedra angular en su creación como partido político, Copei se le opuso a Acción Democrática en su propuesta por eliminar la educación católica y formuló un programa sencillo de prioridades nacionales para de-

finir su propia concepción de la democracia como un sistema basado en el respeto al ser humano como razón de la política, en la justicia social como instrumento de la administración del poder y en la honestidad como condición para ejercer el liderazgo público. Para ello, Copei se inspiraba en la Doctrina Social de la Iglesia católica y se convirtió, también progresivamente, en expresión de la democracia cristiana.

Dos décadas de fecundo debate, a veces con extremos y no exentos de cierta violencia más que verbal, permitieron construir esa sociedad civil democrática, enclavada en organizaciones partidistas ideológicamente opuestas, que irrumpirá con fuerza en la escena pública en 1958 cuando, al albor de la madrugada del 23 de enero de ese año, huye el último de los dictadores.

Un comienzo prometedor

Se trata ahora de asumir la responsabilidad de poner en práctica las ideas de la democracia representativa como un modelo de convivencia pacífica y de igualdad de oportunidades para alternarse en el poder. Los partidos políticos, aún no vertebrados como luego llegaron a ser, imaginan un *modus vivendi* construido sobre cuatro supuestos básicos para el funcionamiento del sistema. Estos supuestos eran los siguientes:

- 1) La articulación temprana de consensos entre los distintos sectores organizados del país en función de un proyecto común de nación a través de un pacto institucional.
- 2) El compromiso efectivo de las Fuerzas Armadas para adaptarse a las reglas democráticas por la vía de su profesionalización y su aceptación a no intervenir en política.

- 3) La utilización de la capacidad financiera del Estado para dirimir conflictos y para atender las demandas populares a partir de los inmensos excedentes que arrojaba la renta petrolera; y
- 4) La consolidación de una cultura democrática a ser extendida a todos los sectores sociales gracias a la función pedagógica de unos partidos políticos que habría que fortalecer para que pudieran alternarse en el poder a través de elecciones libres y garantizar la estabilidad del régimen.

Este pacto institucional, acordado en octubre de 1958 por los principales partidos políticos con la anuencia y el respaldo de otros sectores de la sociedad, como la Iglesia católica, las Fuerzas Armadas y el empresariado privado organizado, adquirió forma a través de la nueva Constitución democrática de 1961 que establecía, como propósito político fundamental, el “asegurar el funcionamiento satisfactorio de la democracia representativa”², en el sentido de garantizar, como se ha sugerido, “crecimiento con redistribución más que la promoción misma de los valores democráticos”.³ Se trataba, por tanto, de darle sentido utilitario al sistema para mantener el respaldo popular necesario a sabiendas de que el pueblo carecía de instituciones intermedias fuertes capaces de organizarlo en su defensa, amenazado, como estaba, por la derecha militar que se resistía a perder los privilegios que por décadas había disfrutado durante las dictaduras y por la subversión de la izquierda que por aquellos entonces había en forma de guerrilla rural con el apoyo del recién inaugurado régimen de Fidel Castro.

Para lograr estos propósitos fue necesario postergar, a través de la suspensión de algunas garantías constitucionales, las libertades económicas y la descentralización de los poderes públicos que ampliaban la libertad y la participación pero que limitaban el control central que requería el modelo propuesto. Por la

² Rey, Juan Carlos: *Visión General de las Reformas del Estado y sus Problemas Políticos*, en Colección del Cincuentenario, n.º 5, del Consejo Supremo Electoral, Caracas, 1988.

misma razón, fue también necesario eliminar del debate nacional algunos temas que eventualmente propiciarían conflictos ideológicos, como los referidos al manejo de la industria petrolera, las diferencias fronterizas con los países vecinos y las relaciones de la Iglesia con el Estado.

No obstante, la condición más relevante para el logro de los propósitos constitucionales fue el de propiciar un esquema corporativista para la administración del Estado que no sólo estableció consensos interpartidistas y coaliciones de gobierno sino que llevó a cargos de responsabilidad pública, como política oficial, a representantes del sector privado y del sector sindical, siempre en la procura del fin último que consistía en mantener un clima de consensos y de armonía social como símbolos del cambio entre los regímenes autoritarios y la democracia. Conceptualmente, por tanto, los procesos electorales debían servir para determinar quiénes constituían mayorías y no, necesariamente, para orientar a los electores en la escogencia de políticas públicas o para segmentarlos ideológicamente.

Al tomar esta decisión, los partidos políticos sacrificaron su vocación ideológica y sus posiciones políticas divergentes para asumir lo que en ese momento parecía más urgente que importante: la estabilidad política, la administración del Estado y la articulación de los intereses sectoriales en función de la capacidad redistributiva de la renta nacional.

El poder con dinero empalaga

Pero este sistema corporativista que delegó en las élites los mecanismos de participación de la sociedad, sobre la base de una supuesta representatividad, al menos formal, fue derivando en estructuras de oligopolios de poder que obligó al entramado social a ajustarse de manera creciente a modos clientelares de relación transaccional con un carácter estrictamente utilitario, una de cuyas formas más visibles fue el desmesurado incremento de la burocracia al pasar de 200 mil

³ *ibid.*

el número de empleados públicos en el último año de la dictadura militar en 1957 a casi un millón ya para 1981⁴ y hoy, en el año 2001, son más de 2 millones y medio y representan el 29% de la población económicamente activa pero hay que acotar necesariamente que el 55% de ella está en la economía informal.

El clientelismo de este *Estado Empleador* desarrolló, además, formas más sutiles, selectivas y excluyentes para la redistribución tanto de los beneficios de la administración pública como del poder. En la práctica, los distintos sectores sociales organizados demostraron ser muy poco democráticos ellos mismos para rotar sus niveles jerárquicos de decisión. Por el contrario, se convirtieron en pequeños feudos cerrados, cada uno por separado, bien por ambiciones de poder, bien por ansias de una riqueza relativamente fácil que dependía de las relaciones formales corporativas no segmentadas para su distribución y beneficio. De esta manera, los enclaves corporativistas que habían sido promovidos para lograr un consenso social mínimo, como la central obrera y los gremios empresariales, por ejemplo, o los mismos partidos, fueron perdiendo su capacidad de articular intereses sectoriales y, consecuentemente, su función de representatividad.

Esta desvinculación paulatina entre la sociedad organizada y el pueblo pudo pasar desapercibida hasta mediados de los 80 mientras la bonanza petrolera permitía disponer de ingentes recursos, pero con la restricción de excedentes, producto especialmente de la voluminosa deuda externa en coincidencia con las variaciones negativas en los precios petroleros y la sostenida merma de los ingresos nacionales, estos enclaves de poder se transformaron para los ciudadanos en irritantes manifestaciones de privilegios y de abusos de poder. Como consecuencia, ninguna institución pública fue capaz de sostener la confianza popular y los partidos políticos, que constituían el mascarón de proa del sistema, pasaron a convertirse en el emblema del privilegio, de la desigualdad, del aprovechamiento

⁴ Moisés Naím y Ramón Piñango: *El Caso Venezuela, una ilusión de armonía*, ed. IESA, Caracas, 1984, p. 542

ilegítimo de la renta y, consecuentemente, en una fácil explicación para la pobreza y el malestar social.

El primer supuesto de la estabilidad democrática y del sistema de partidos de Venezuela – la capacidad de lograr consensos por parte de sus élites para un acceso igualitario a la redistribución de la renta- había dejado de ser tal, por tanto, ya a mediados de los 80, al menos una década antes de producirse los intentos de golpe de Estado en 1992 que dieron paso al régimen que actualmente vive Venezuela.

Repartir para cosechar aplausos

Como dicho, el modelo de desarrollo se basó en las oportunidades de redistribución que ofrecía la renta petrolera. Es menester reconocer que tuvo grandes resultados en el corto plazo pero fue generando también grandes perversiones de manera progresiva. A partir de este concepto de *Estado Paternalista* el país logró el control de sus recursos naturales, se le dotó de grandes obras de infraestructura, se creó una estupenda y gigantesca industria pesada en el área de la energía y la minería, se impulsó la diversificación económica e industrial privada y se hizo especial énfasis en extender masivamente los beneficios sociales en electrificación, vialidad, educación y atención sanitaria a toda la población. El crecimiento sostenido de la economía al 7 % anual durante los primeros 30 años de vida democrática tuvo repercusiones positivas en todas las áreas y sectores.

El crecimiento basado en la renta de la industria petrolera bajo el esquema del Estado corporativista que hemos descrito ha tenido, en la otra cara de la moneda, enormes consecuencias negativas. Entre ellas, quizá la más perjudicial ha sido la creación de una cultura económica rentista que ha mitificado la riqueza como producto de la extracción y la distribución clientelar, desvalorizado al trabajo y la productividad como instrumentos de desarrollo, al tiempo que ha propiciado el aumento de las demandas sobre el Estado y exacerbado las expectativas de la

población.⁵ ¿Para qué esforzarse con el trabajo si el país es “rico y la función del gobierno es la de redistribuir esa riqueza”? Alrededor del 90% de los venezolanos comparte estas creencias básicas⁶, de donde no puede extrañar la baja motivación laboral que muestran los estudios que se han realizado al respecto. Algunos de estos resultados muestran el dramático desafecto que ejerce el trabajo: para el 20 % de la población el trabajo es un castigo, por lo que no se le desempeña más que en situaciones de extrema necesidad y se le abandona fácilmente cuando se lo obtiene; para otro 34 % adicional, el trabajo se asume estrictamente en lo mínimo necesario sin valorar a cambio nada más que el salario que se obtiene por él. El 54 %, en total, coincide en esta desvalorización de la relación laboral, pues para esta mayoría de la población adulta del país “nadie se hace rico con un trabajo honesto”. Por contraste, sólo el 10% de la población manifiesta índices altos de motivación hacia el trabajo.⁷

En parte por las ventajas competitivas y de rentabilidad que supone el petróleo, pero sin dudas tras el cortinaje de esta manera de concebir la riqueza y de crearla, así como de orientarla hacia el gasto y no hacia la inversión y el ahorro, las actividades económicas no petroleras representan apenas el 20% de la productividad laboral del país.⁸ Ello resulta especialmente dramático en su impacto sobre el empleo porque la industria petrolera venezolana, a cargo del 80% de la productividad laboral, es fuente directa de trabajo únicamente para 50 mil personas sobre una población económicamente activa de más de 8 millones. La baja productividad de las actividades económicas no petroleras obliga a concluir, como dice Maxim Ross, “que hemos asignado muy mal la renta, trasladando recursos

⁵ Alfredo Keller: *Indicadores Sociales y Electorales como Reflejo del Grado de Satisfacción de las Reivindicaciones Políticas*, Ponencia presentada a la Asociación Alemana de Institutos Latinoamericanos, Bonn, 1992, mimeo.

⁶ De manera sistemática, estas creencias básicas son evaluadas en las encuestas de opinión pública que ha realizado el autor desde fines de la década de los 80 sin encontrar variaciones significativas hasta la fecha.

⁷ Roberto Zapata: *Los Valores de los Venezolanos*, ed. Conciencia 21, 1996.

⁸ Maxim Ross: *¿Por qué somos más pobres?*, en: *Estrategias para superar la pobreza*, FKA, Caracas, 1996, p. 82

altamente productivos a recursos muy poco productivos o, inclusive, improductivos".⁹

Estos factores, sumados a otros de tipo conceptual sobre la relación del Estado y la Sociedad y a los tipos de decisiones públicas adoptadas en concordancia con el modelo de desarrollo cerrado, centralista y redistributivo que ejecutaron los sucesivos gobiernos hasta 1989, son la causa directa del sostenido incremento de la pobreza. Para 1970, la CEPAL calculaba que el índice de pobreza en Venezuela afectaba al 25% de la población, apenas 9% en situación de indigencia. Para 1995, cálculos de la Oficina Nacional de Planificación (Cordiplán) y de UNICEF, la estimaban en 84%, de la cual 34% en situación extrema.¹⁰ Estos últimos datos se dan todavía hoy por vigentes.

Desde finales de la década de los 70 se habla de una Venezuela en crisis. Una crisis claramente percibible por los ciudadanos que podían contrastar unos años iniciales de democracia con bonanza económica, inflación relativamente estable y reducida y bajas tasas de desocupación laboral, con los años sucesivos caracterizados por una creciente recesión económica de altos índices inflacionarios y gran volumen de desempleados.

Con estos indicadores tan malos sobre la repercusión del manejo económico de los últimos 40 años parece difícil comprender por qué la democracia representativa logró perdurar sin mayores sobresaltos hasta 1992.

⁹ ibid.

¹⁰ Carlos Sabino, *La Pobreza en Venezuela*, en: *Estrategias para superar la pobreza*, FKA, Caracas, 1996, p. 55

Los valores de la democracia de partidos

El cuerpo de creencias que describimos anteriormente para explicar las fuentes de la riqueza y el papel del Estado en su redistribución está íntimamente correlacionada con la condición de país petrolero, como ya vimos. De aquí resulta obvio concluir que este país hubiera sido completamente otro sin la renta del petróleo, no sólo en la capacidad para crear infraestructura y motorizar la economía sino, especialmente, para la articulación de los intereses sociales y orientar el modelo de desarrollo institucional.

El pacto institucional del 58 delegó principalmente en los dos grandes partidos de la época la responsabilidad de ordenar el esquema corporativista que hemos explicado, bajo la condición inicial de apoyarse mutuamente a través de un programa mínimo común de gobierno y la participación de los dos en el reparto de cargos burocráticos, excluyendo de todo debate a los movimientos de origen marxista. Estas condiciones tenían un propósito muy claro que buscaba minimizar los tradicionales conflictos que por vía política habían sido la constante histórica de la sociedad venezolana entre los enclaves conservadores y liberales que habían diezmado a la población durante todo el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. Sin ninguna duda, estas metas fueron ampliamente logradas, especialmente en cuanto a la decisión de presentar un frente común ante las fuerzas de izquierda marxista, a través de cuya polarización no sólo se logró la derrota militar, política y cultural de la subversión castrista de los años 60 sino que repercute todavía hoy en un sostenido rechazo a las ofertas de la extrema izquierda.

Las nuevas fuerzas ideológicas determinaron cuatro valores generales sobre los cuales desarrollar una nueva cultura: nacionalismo, estatismo, populismo y desarrollismo¹¹, estableciendo así el carácter y la personalidad política de la nueva era democrática.

El *nacionalismo* era un planteamiento lógico si se toma en cuenta que para entonces ya se tenía amplia conciencia del potencial del país en recursos naturales, todos en manos de empresas extranjeras que aportaban a la economía nacional sólo a través de regalías a cambio de las concesiones para la explotación energética y minera. La culminación de este proceso arribaría en 1976 con la nacionalización, muy exitosa por lo demás, de la industria petrolera y la creación de PDVSA.

El *estatismo* era consecuencia del creciente nacionalismo, pero también era producto de la influencia socialista de la época, de la desconfianza hacia los pocos empresarios privados que, por ser pocos y formar parte de familias cerradas, constituían sospechosamente una *oligarquía del dinero*¹², de la atomización y poca calificación de los recursos humanos existentes en el mercado laboral y, finalmente, por las tradiciones hispanoamericanas, razones todas según las cuales “se espera un papel paternalista e interviniente del Estado”.¹³

El *populismo* ha sido una línea generalizada del pensamiento político de América Latina, a lo cual no escapó Venezuela. Por el contrario, teniendo a su disposición tal cantidad de excedentes financieros, el esquema de desarrollo se concibió para que la función prioritaria del Estado fuera la de reducir las desigualdades sociales dándole preeminencia a las políticas sociales a través de controles a la economía de suerte de facilitar la incorporación de las clases menos favorecidas a las oportunidades que ha brindado la renta petrolera. Pero el Estado no delegó estos objetivos en una burocracia tecnocrática, ni se preocupó mucho por formarla, sino que trasladó los mecanismos doctrinarios y financieros de sus funciones protectoras y redistribuidoras a los partidos gobernantes dando pie para el desenvolvimiento del esquema de lealtades transaccionales de los ciudadanos en el fenómeno social que conocemos como clientelismo. La supuesta función peda-

¹¹ José A. Gil Yepes: *El Reto de las Elites*, Ed. Tecnos, Madrid, 1978

¹² Título del libro de Domingo Alberto Rangel (1972) en el que el autor sostiene, equivocadamente, que el sistema político y los partidos dominantes estaban controlados por los grandes grupos económicos de empresas familiares.

gógica de estos partidos para transformar la oferta de igualdad de oportunidades en capacidad productiva de los ciudadanos no trascendió más allá de los escasos cuadros medios gerenciales de los partidos y, en la práctica, se utilizó la capacidad transaccional casi que exclusivamente para garantizarse mayorías electorales con las cuales preservar su acceso y control del poder.

Así que el esquema corporativista del Estado, en respuesta a esta concepción populista bajo el liderazgo y control de los partidos, trajo aparejado el reforzamiento de un cuerpo de creencias utilitarias, por una parte, y clientelares, por la otra, con el fin de mantener la estructura de equilibrios que se había logrado. Paradójicamente, lo que el pueblo salió a reclamar en los disturbios callejeros de 1989 y que aplaudió en las asonadas militares del 92, fue justamente la percepción de que la promesa redistributiva básica no se cumplía y que era necesario un dramático y radical cambio de estructuras para volver a ello. Esta situación de extremos puso de relieve lo que ya venía advirtiéndose en los círculos académicos desde mediados de los 80: que la democracia formal y normativa había dejado atrás el acompañamiento de una cultura política democrática acorde. Por ejemplo, un estudio de opinión pública, realizado inmediatamente después del intento de golpe de Estado de febrero de 1992, reveló que el 42% de la población creía que “los militares actuaban para poner orden en la democracia” y que, puesto el orden, “a los tres meses convocarían a nuevas elecciones”.¹⁴ Más recientemente, otro estudio de opinión pública concluye que la libertad - específicamente la libertad de expresión - es el único valor positivo que ha ofrecido la democracia, y que sus deficiencias en cuanto a justicia, igualdad de oportunidades, protección de las personas y de sus bienes, y acceso a los mecanismos de superación individual, como la educación, son signos de su fracaso.¹⁵

Puede decirse que el *desarrollismo*, como propósito que privilegia el estatismo nacionalista, resulta una contradicción como no sea a través de lo que se

¹³ José A. Gil Yepes: ob. cit., pág. 168

¹⁴ Estudio de Opinión Pública dirigido por el autor en marzo 1992.

llamo *capitalismo de Estado*. No obstante, el Estado venezolano, a través de sus sucesivos gobiernos, mantuvo una sistemática política de incentivos a la iniciativa privada, por la vía de regulaciones y de exoneraciones en la idea de promover “el desarrollo del sector moderno de la economía para que éste crezca y beneficie e incorpore al mayor número posible de los ciudadanos a la producción y disfrute de bienes sociales”.¹⁶ No obstante, estas políticas desarrollistas, especialmente expandidas durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-79), derivaron hacia la formación de enclaves económicos fuertes pero escasos, acumulación de capitales, monetización de la economía, orientación de los negocios hacia el consumo externo de bienes y servicios y, en general, a la pérdida de la inversión y el ahorro y la consecuente demostración de despilfarro, privilegios y corrupción.

Estos cuatro elementos *valorativos* de la cultura democrática fueron muy atractivos para todos los estratos sociales y para todos los sectores, públicos y privados. Eran rentables, producían beneficios y satisfacían necesidades. Pero no soportaban la disminución de la renta petrolera de la que se nutrían ni, mucho menos, los cambios en las políticas públicas que reorientaran sus propósitos. Hoy en día, algunos estudios realizados al respecto muestran, con sobrado dramatismo, la fuerza con que estos valores han penetrado en la cultura de la sociedad y cómo ejercen una presión muy grande para mantenerlos. Puede estimarse, en este sentido, que alrededor del 60 % de la población continúa defendiendo estos valores sin aceptar revisión alguna; mientras que 25 % aboga por cambios orientados hacia la modernización económica y el resto se desentiende de estos temas.¹⁷

En resumen, los gérmenes de la inestabilidad política del sistema creado en 1958 estuvieron siempre en el propio esquema de desarrollo que se había puesto en marcha, no porque entonces estuviera ya equivocado, sino porque sus dirigentes no supieron o no pudieron hacerlo evolucionar de una prioridad basada en el ordenamiento político a un modelo sustentado en un orden económico y so-

¹⁵ Fundación Pensamiento y Acción: Estudio de los Valores de la Democracia, enero de 1996

¹⁶ José A. Gil Yepes: ob. cit., pág. 170

cial. En 1992 sólo se puso en evidencia que este esquema había hecho al país cada vez más dependiente de la renta petrolera y que no sólo era fundamental para su mantenimiento sino que se había convertido en un obstáculo para la modernización. De esta manera, los cuatro supuestos sobre los que se fundamentó la democracia fueron creando una severa distorsión general.

Lo triste del caso venezolano es que las continuas señales del aparente éxito para preservar al sistema, especialmente por el contraste manifiesto con la tendencia autoritaria y belicosa del resto de América Latina, convenció a las élites políticas propias y ajenas de que Venezuela había puesto en práctica un modelo propio que era el más adecuado para el desarrollo democrático y el más hábil para mantener un crecimiento económico constante con una redistribución eficaz de la renta nacional bajo el propósito de disminuir las diferencias sociales. Del impacto del modelo venezolano de desarrollo durante los primeros 30 años de democracia son testimonio evidente la profusión de literatura académica internacional existente. ¡Qué equivocación tan grande! Pero todavía hoy, la constante es que el observador externo, y muchos internos, se preguntan cómo es posible que fracasara tan estrepitosamente la economía venezolana si el país dispone de todos los recursos necesarios para haber alcanzado el ansiado desarrollo. Es una constante que revela poco conocimiento de las causas de la crisis y mucha confusión general sobre las soluciones.

¹⁷ Datos hallados por el autor en sus estudios de opinión pública.

Los ciclos de expectativas y frustraciones

Un aspecto muy importante para comprender el deterioro paulatino de la confianza en los partidos políticos fue la sustitución de los procesos electorales basados en ofertas por comicios que tenían más carácter de plebiscitos sobre la capacidad redistributiva del gobierno saliente. Como se daba el caso que las frustraciones populares superaban casi siempre a las satisfacciones, la batalla electoral se convertía en un proceso de descalificaciones mutuas entre los partidos y sus dirigentes.

El partido ganador terminaba obteniendo la mayoría electoral únicamente porque exacerbaba las frustraciones que había generado su contrincante a la par que se montaba en una gigantesca ola de promesas imposibles de cumplir. De esta manera, cinco años más tarde se repetía el ciclo dejando tras de sí una acumulación cada vez mayor de frustraciones y más razones para dejar de creer en las instituciones partidistas.

En un estudio de opinión pública realizado durante las elecciones presidenciales de 1988¹⁸ ya el 50% de los electores decía que la razón para votar era para elegir al mejor candidato y el otro 50% lo hacía para evitar que ganara su contrincante.

Y en esas mismas encuestas, a partir de 1988, la motivación dominante de los electores era la de buscar un cambio, motivación que ha ido radicalizándose hasta llegar a la impresionante cifra actual del 63% de la población detrás del mismo objetivo.

Para las elecciones de 1993 ya la población estaba dudando seriamente en este sistema electoral de corte plebiscitario que ofrecía una redistribución que jamás satisfacía las expectativas. Así que para esas elecciones y las sucesivas has-

ta la última del año pasado, la población, estimulada por el discurso revolucionario de Hugo Chávez que proponía cambios radicales y sanciones a los responsables del fracaso del modelo de desarrollo habido hasta entonces, modificó temporalmente sus prioridades motivacionales para darle un vuelco a la situación.

Un sistema totalmente distorsionado a como se había planificado 40 – 50 años atrás, totalmente descalificado por sus propios actores fundamentales y totalmente equivocado en sus estrategias de desarrollo para generar bienestar popular, sólo podía enfrentarse, tarde o temprano, a una ruptura también total.

Y llegó el 92

Esta ruptura se dio en la madrugada del 4 de febrero de 1992 por la vía de las armas y de la intervención militar. Si bien el intento fracasó, la asonada adquirió el valor de representar una alternativa distinta a los partidos políticos tradicionales aún al costo de lo que podía significar a todas luces una amenaza contra el sistema político de libertades públicas.

En resumen, podemos sintetizar que las amenazas contra el sistema político que evidenciaron los intentos de golpe de Estado en 1992 tenían origen en diversos aspectos estructurales, más allá de los hechos visibles de las rebeliones militares y populares.

Proponemos que los factores que amenazaron la estabilidad del sistema político en Venezuela fueron los siguientes:

- 1) La ausencia de un programa de adaptación cultural en paralelo a la introducción de las reformas estructurales en la economía y en la política, a comienzos de los 90, cuando se promovió la apertura de los

¹⁸ En estudios realizados por el autor.

mercados y la descentralización política. Hubiera sido necesario, ya a fines de la década de los 70, desmontar los mitos de la riqueza rentista.

- 2) La incapacidad de las élites de poder para romper con el paternalismo clientelar, así como para gerenciar la crisis y los cambios económicos y políticos diseñados para salir de ella.
- 3) La pérdida sistemática de legitimidad y representatividad de las instituciones partidistas por el abuso del régimen de privilegios y por la no percepción de la intensidad de los cambios que se les demandaba.
- 4) La subestimación del cuerpo de motivaciones de la opinión pública (arraigadamente populista), así como de su capacidad para articularse en torno a nuevos liderazgos o espejismos de liderazgos al margen de la corriente de las innovaciones.
- 5) Pero, también, el trato irrelevante del debate ideológico, la generalización de la protesta como actitud dominante de revalorización del yo colectivo en las relaciones con el entorno.
- 6) La emergencia de nuevos liderazgos o de un nuevo tipo de liderazgo o de una nueva forma de presentación del liderazgo, más independiente de las relaciones partidistas, que se mantenían basadas en una ciega lealtad de origen clientelar, y más orientados a la articulación de intereses utilitarios concretos, por una parte, y reivindicativos de un sentimiento generalizado de opresión, por la otra; y
- 7) La trastocación del orden de prioridades en el debate público (donde lo social y lo económico quedaba normalmente supeditado al oportunismo político).
- 8) La transformación de los partidos en simples maquinarias electorales como forma exclusiva de funcionamiento.
- 9) La falta de preocupación de los partidos por formar generaciones de relevo.

Podemos decir que los partidos políticos fueron creciendo hasta convertirse en gigantescos paquidermos, pesados y desentendidos de su entorno y tan confiados en su propio tamaño que no se percataron que eran vistos por la población más bien como si fuesen cocodrilos.

El nuevo régimen

Pero lo mismo puede decirse del nuevo régimen instaurado desde hace casi tres años por aquel fracasado golpista del 92, solo que, al igual que los elefantes, éste no parece tener la agudeza de visión necesaria para darse cuenta que el sistema que nos ha propuesto es una versión aumentada y corregida de todos los defectos estructurales que llevaron a la ruina al sistema democrático de partidos: una sobreoferta de beneficios basada en la creencia mitológica de la riqueza nacional y de la capacidad redistributiva del Estado, la política como expresión de un voluntarismo personalista y la subordinación de lo económico a lo político.

La diferencia es que el nuevo régimen tiene otra concepción de la organización política del pueblo para alcanzar la olla de oro al final del arcoiris. Se ha promovido una nueva Constitución, entre cuyas características están otorgarle derechos políticos a los militares, fortalecer la figura presidencial con mayor número de atribuciones y sustituir el concepto de democracia representativa por el de *democracia participativa*.

Con un aluvión de votos emocionales, organizados por una amalgama poco clara de viejos dirigentes de la izquierda minoritaria y militares, tanto en activo como en situación de retiro, el régimen se estructuró con el auxilio de un partido político, fabricado en 12 meses, que por carecer de marco doctrinario, estatutos o elecciones internas está en constante conflicto consigo mismo en una carrera desenfrenada por el reparto de cuotas de poder. Por esta razón, cada nueva encuesta, que se divulgan periódicamente en la prensa, muestra cómo su aparato de poder popular va desinflándose progresivamente porque ya sólo el 9% de la po-

blación cree que está resolviendo los problemas más acuciantes del desempleo, la seguridad personal y la corrupción¹⁹. El mismo estudio revela que aunque Acción Democrática y Copei parecieran estar condenados a su desaparición, están surgiendo algunos retoños que, al contrario del declive del Movimiento Quinta República del Presidente Chávez, muestran un sostenido ascenso.

Para concluir...

A diferencia de otros países de la Comunidad Andina de Naciones, en los que la pobreza de recursos ha sido un factor importante para el descrédito de los partidos políticos, el caso venezolano es la muestra de que también la abundancia puede indigestar y morirse por ello.

Caracas, Agosto 2001

¹⁹ Estudio realizado por el autor en julio 2001.